

Foro

MARZO-ABRIL, 2020

VOL. 4, NÚM. 2, PÁGS. 22-40

El Desencanto de los Chilenos

¿Tiene la Educación Superior algo que Ver?

José Joaquín Brunner

El Desencanto de los Chilenos

¿Tiene la Educación Superior algo que Ver?

José Joaquín Brunner

José Joaquín Brunner es profesor titular y director de la Cátedra UNESCO en la Universidad Diego Portales y ex ministro Secretario General de Gobierno del Gobierno de Chile. También es el autor del libro *Nueva mayoría: fin de una Ilusión*.

 QUÉ relación hay entre la protesta social masiva que irrumpe en Chile a partir del mes de octubre de 2019 y la educación superior (ES) chilena? Antes de salir a explorar algunas ideas que intentan responder a esta acuciante pregunta, es necesario situar las coordenadas en que ella se formula. Primero, es imperante describir en qué consiste nuestro malentendido “estallido social”; cómo puede caracterizarse y cuál ha sido su evolución. Segundo, es pertinente saber qué fisonomía adopta la ES en Chile, cuáles son sus bases de economía política, cómo se organiza y cuál ha sido su contribución a la formación técnico-profesional de la población. En tercer lugar, es apropiado examinar algunas percepciones y demandas manifestadas por los protestantes, en su mayoría personas con algún nivel de ES. Hecho todo esto, se puede, entonces, ofrecer una interpretación del fenómeno de crisis de gobernabilidad y protesta social en torno a una hipótesis exploratoria central: que la amplia difusión de la ES, que ha producido un incremento excesivo de profesionales y técnicos diplomados, y el surgimiento de nuevos grupos de clase baja no pobre y de clases medias vulnerables, nacidos de las transformaciones experimentadas por la sociedad chilena duran-

te los últimos 30 años, es lo que ha hecho que las masas se movilicen y reclamen por beneficios que son característicos de las sociedades capitalistas desarrolladas y que el sistema chileno solo satisface parcial y desigualmente. Cabe, por último, preguntarse cómo las universidades pueden responder al desafío que presenta la actual crisis. Aunque las respuestas normativas a este asunto en la tradición del pensamiento latinoamericano son diversas, la correcta quizás sea aquella que hoy parece más difícil de sostener.

Todo comenzó con el alza de los precios del transporte público

Primero, entonces, la protesta social masiva; es decir, el fenómeno que comienza el último trimestre del año 2019, inicialmente, a través de la evasión de pago del pasaje cobrado por el Metro (tren subterráneo) de la ciudad de Santiago por parte de los estudiantes como una expresión de repudio hacia el alza de precios anunciada días antes por la empresa pública que administra este medio de transporte. Pronto, dicha evasión dio paso a la acción violenta de jóvenes encapuchados, quienes el 18 de octubre tomaron por asalto las estaciones del Metro y dañaron 77 de sus 136 —6 fueron totalmente incendiadas, 14 tuvieron daños parciales causados por incendios y 57 sufrieron daños diversos—. Al día siguiente, el gobierno decreta un estado de emergencia —uno de los tipos de estado de excepción constitucional que pone a las Fuerzas Armadas, junto a la policía de carabineros, a cargo del orden en las calles— que se extiende a lo largo de 8 días, durante algunos de los cuales se decreta además toque de queda.

A pesar de tan drástica medida, la protesta civil continúa y se extiende a todo el territorio nacional. A su sombra se amplifican también las acciones violentas —se destruyen otras estaciones del Metro, se plantan barricadas en las calles, se saquean locales comerciales, se atacan comisarías de la policía y otros espacios públicos y privados—. Entretanto, el 25 de octubre, en respuesta a una auto convocatoria a reunirse

pacíficamente en las ciudades de todo el país, se reúne en el centro de Santiago una masa estimada en 1,2 millones de personas que concurre con el ánimo de comunicar su frustración con sus condiciones de vida, su repudio a la política de partidos, su rabia producto de los abusos de poder y la corrupción, su desconfianza frente a las instituciones establecidas y a las élites, junto con las más variadas demandas en los planos de la existencia individual y colectiva. Por un instante la masa parece celebrar su propio despertar. Lo mismo sucede en otras ciudades grandes, medianas y pequeñas. Se habla de que Chile nunca más volverá a ser igual. Se crea un clima de rebeldía que proyecta un emocionante lazo de continuidad con la revolución socialista del presidente Allende, interrumpida por el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Vuelven a recordarse las palabras (que ahora resuenan proféticas) del presidente mártir pronunciadas momentos antes de quitarse la vida frente a la sublevación militar: “Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigán ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”.

En vez de banderas partidistas, de los acostumbrados líderes políticos y las tradicionales organizaciones populares, la calle, como nuevo protagonista de la escena social, se llenó de gritos y pancartas, de lemas de los pueblos originarios, de clubes de fútbol y asociaciones LGTB, de expresiones feministas, de familias enteras, a ratos, de un espíritu de carnaval y, como muestran las fotografías que fueron tomadas desde la altura y vertiginosamente transmitidas por las redes sociales, de una verdadera marea de jóvenes. Y, en los márgenes de la protesta, al lado de las muchedumbres o al momento de comenzar ellas a disolverse, de los violentos que enfrentaban a la policía, destruían la vía pública y su señalética y monumentos, incendiaban Iglesias y hoteles, saqueaban centros comerciales e incluso hospitales, armaban barricadas de fuego, sembraban terror en el corazón de la ciudad y los barrios periféricos. Por su parte, las fuerzas encargadas del orden y la seguridad se hallaron des-

bordadas y reaccionaron con un uso desmedido de sus medios, lo que causó rabia y temor entre los manifestantes y centenares de violaciones a los derechos humanos. Esta manera de actuar dio un motivo adicional para la protesta legítima y generó una espiral fatídica de desorden e ingobernabilidad que creó un cuadro de anomia en la vida cotidiana y de ineffectividad de la institucionalidad democrática ¹.

Transcurrido el primer mes de tan intenso fenómeno social, y cuando ya la cotidianidad se había dislocado y cundía un ánimo de creciente exasperación e incertidumbre, las fuerzas políticas de gobierno y oposición suscriben un acuerdo de refundación institucional, manifiestan su voluntad de responder a las demandas de la calle y reconocen la necesidad de un plan para recuperar el orden y la seguridad amenazados por la violencia. De modo que, el 15 de noviembre de 2019, la casi totalidad de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento suscriben un “Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución”, en el que se comprometen a convocar a un plebiscito para consultar a la ciudadanía si respalda la creación de una convención encargada de elaborar una nueva carta fundamental, cuyos contenidos normativos deberán aprobarse por 2/3 de sus miembros y ser sometidos posteriormente a ratificación mediante un segundo plebiscito popular.

La inauguración de un momento constituyente, la promulgación de algunas medidas sociales en áreas sensibles para la protesta social y la reducción parcial de la violencia en las calles abrió un camino —incierto todavía, inestable y frágil— para encauzar la crisis de gobernabilidad, poner en marcha la construcción de un nuevo orden constitucional y

¹Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre el 18 de octubre y el 31 de enero hubo 29 víctimas mortales; los servicios de urgencias médicas del país atendieron a 13.046 personas por heridas relacionadas con las protestas; el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contabilizó 1.624 personas heridas por perdigones, de las cuales 405 sufren de trauma ocular, 33 presentan estallido ocular y otras tantas perdieron la visión en ambos ojos. Además, la CIDH contabilizó 4.062 agentes de carabineros lesionados y al menos 23.274 detenciones, de las cuales al menos 1.615 condujeron a prisión preventiva. La CIDH observa además la existencia de “abusos sexuales, incluyendo denuncias de violaciones, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de las detenciones”. Y manifiesta su preocupación por las denuncias recibidas respecto de grupos particularmente vulnerables, como las mujeres embarazadas; la comunidad LGBTI; los niños, niñas y adolescentes; los pueblos indígenas; los migrantes y las personas afrodescendientes.

restablecer la normalidad de la vida cotidiana. Al momento de escribir estas notas —los primeros días de febrero de 2020—, ninguno de esos aspectos se encuentran garantizados. Se mantiene aún una extendida desconfianza en las instituciones y grupos políticos, el gobierno y el presidente gozan de escasísimo apoyo, la oposición se halla fragmentada y es impopular, la economía da señales de estancamiento, la sociedad continúa convulsionada y predomina un clima cultural de expectativas contrapuestas.

La educación superior chilena es predominantemente privada

Para efectos del presente análisis interesa subrayar algunos rasgos de la ES chilena. Se trata de un sistema con una economía política mixta, con provisión predominantemente privada y con un financiamiento compartido entre el Estado y las familias. Cuenta con acceso masivo; la tasa bruta de participación (que es del 88%) es una de las más altas del mundo. La matrícula es actualmente de 1,26 millones de estudiantes, distribuidos entre 151 instituciones —61 universitarias, 43 de formación profesional y 47 de formación técnica— estatales, privadas con subsidio fiscal directo y privadas sin subsidios fiscal directo. Según sus propias declaraciones, estas instituciones cuentan con alrededor de 90 mil docentes, cubren todo el territorio nacional a través de aproximadamente 400 sedes, ofrecen más de 10 mil programas, graduaron en el año 2018 alrededor de 240 mil profesionales y técnicos y, en ese mismo año, su personal académico publicó aproximadamente 15 mil artículos indexados por Scopus. Existen múltiples jerarquías reputacionales entre las instituciones, siendo las más importantes las establecidas según el carácter jurídico-institucional (estatales o privadas de algún tipo), la edad (peso de las tradiciones), el nivel académico (universidad, instituto profesional o centro de formación técnico), la complejidad relativa (densidad de conocimiento, investigación y posgrados), el grado de selectividad académica (si son de élite nacional, de semielite

nacional o regional, de reclutamiento mesocrático —grandes, medianas o pequeñas— o de acceso libre —sin selección académica—).

Además de estos rasgos descriptivos pueden agregarse otros, distintivos en el contexto internacional comparado. En Chile, un 85 % de la matrícula total se registra en instituciones privadas y, hasta 2016, todos los estudiantes pagaban un arancel por sus estudios superiores, cualquiera que fuese la naturaleza jurídica de la institución en que se hallaban inscritos, aunque una fracción significativa obtenía algún tipo de beca para cubrir parcial o íntegramente el costo de los estudios. Las propias instituciones determinaban, cada una por separado, el precio de sus aranceles por los programas de estudio ofrecidos, los que en promedio eran altos en términos internacionales comparativos². Adicionalmente existían esquemas de crédito estudiantil a los cuales podían recurrir los estudiantes de menores recursos; con el tiempo estos alcanzaron una amplia cobertura, y generaron una onerosa deuda para numerosos graduados y, más pesada aún, para aquellos estudiantes que abandonaban sus estudios.

Por este motivo, el movimiento estudiantil (secundario y superior) venía protestando contra la privatización y mercantilización de la ES y exigiendo, con creciente intensidad a partir del año 2006, el fin del lucro y la educación superior pública gratuita y de calidad. En respuesta a esas críticas y demandas de reivindicación, la administración Bachelet (2014-2018) impulsó una amplia reforma que, a partir del año 2016, consagró la gratuidad de los estudios superiores para los jóvenes provenientes del 60 % de la población de menores recursos, que luego se extendió hasta el 70 % para los estudiantes de institutos profesionales y centros de formación técnica.

Al interior del actual movimiento de protesta social, las demandas de reivindicación por la gratuidad universal en la educación superior, prometida por el gobierno de Bachelet y prevista en la ley para un indeterminado futuro, se mantienen, aunque no ocupan un lugar prioritario en la agenda de este movimiento. En cambio, sí lo tiene la condonación

²OECD (2019). *Education at a Glance 2019: OECD Indicators*. París: OECD Publishing.

de las deudas ingentes originadas por el crédito estudiantil. De cualquier forma, el financiamiento de la ES mantiene hasta hoy un carácter mixto, con participación de recursos provenientes de fuentes estatales y privadas (hogares) en proporciones similares. A su vez, los recursos estatales son asignados en un 73 % bajo la forma de subsidios a la demanda (estudiantes), para cubrir el gasto de la gratuidad (el 34 %) y los créditos y becas (el 39 %), mientras que el restante 27 % se destina directamente a las instituciones estatales y privadas que son subsidiadas por el Estado (en total, 27 instituciones), en su mayor parte de manera competitiva o según el desempeño de las instituciones.

Insatisfacción con la democracia, y otros motivos

Dese el primer momento tras el estallido de la violencia del 18 de octubre pasado, pudo observarse que la protesta social —y también los actos de violencia— tenía un distintivo carácter generacional por su composición etarea. Una encuesta realizada a los protestantes de 18 años o más en las calles de Santiago entre los días 8 y 29 de noviembre de 2019³ indica que la edad promedio de aquellos es de 33 años. La mayoría (el 49 %) proviene de las comunas de Santiago Centro, Ñuñoa, Puente Alto, Maipú, La Florida y Providencia, todas ellas típicamente de clase media baja, intermedia y alta. Hombres y mujeres participan en porcentajes similares. Sin embargo, llama la atención el nivel educacional declarado por los protestantes: el 55 % dice haber completado la ES (el 32 % dice haber completado la ES universitaria; el 13 %, la ES técnico-profesional; y el 10 %, un posgrado), el 9 % abandonó los estudios superiores sin completarlos, el 32 % manifiesta tener educación secundaria o estar estudiando en el nivel terciario y el 3 % tener educación secundaria incompleta o menor. Si tomamos en cuenta la proporción de la población de 25 a 64 años que posee estudios de educación superior, que en Chile es del 22 %, estos datos muestran una

³Encuesta Zona Cero (noviembre de 2019), realizada por el Núcleo de Sociología Contingente de la Universidad de Chile.

clara sobre-representación en la protesta de las personas con ES (en todos sus niveles). Lo mismo se observa si se considera la población entre 25 y 34 años de edad, en cuyo caso la proporción de personas con estudios superiores es del 30 %. Un 54 % de los protestantes declara ser el principal aportante al ingreso de su hogar. La mayoría (un 64 %) se identifica con posiciones políticas de izquierda, mientras que el 15 % se declara de centro, el 1 % de derecha, el 18 % de ninguna y el 2 % de otra posición o no responde. Se trata, por tanto, de un universo ideológico completamente distinto al del conjunto de la población chilena. Un 93 % de las personas encuestadas se encuentra “muy insatisfecha” o “insatisfecha” con la democracia en Chile; solo un 6 % se declara “satisfecha” o “muy satisfecha”. Interrogadas sobre las tres principales demandas que hacen, y por las que protestan, responden: las pensiones (el 75 %), la salud (el 58 %), la educación (el 57 %), la justicia social (el 23 %), una nueva constitución (el 21 %), un empleo y sueldos dignos (el 16 %), los derechos humanos y no más impunidad (el 10 %). Por último, el 47 % de las personas encuestadas en las protestas declara haberse manifestado en las calles de modo “seguido” o “muy seguido” durante los últimos 10 años; el 43 %, “a veces” o “rara vez”; el 9 %, “nunca antes”. Solo un 35 % declara pertenecer a una organización vinculada a la movilización, como centros estudiantiles, juntas de vecinos, partidos políticos u otras.

En cuanto a lo que la población mayor de 18 años en general, encuestada a nivel nacional durante el desarrollo de las protestas —entre el 28 de noviembre de 2019 y el 6 de enero de 2020⁴—, piensa sobre la protesta social y la violencia que la acompaña, esta muestra en términos gruesos una relativa aprobación hacia los protestantes y un rechazo, aunque ambiguo, hacia la violencia ejercida al amparo de aquella. El 55 % las apoyó, el 11 % las rechazó, el 10 % inicialmente las apoyó pero luego las rechazó, el 7 % inicialmente las rechazó pero después las apoyó, el 15 % no las apoyó ni rechazó y el 2 % no sabe o no contesta. De las alternativas ofrecidas, las razones atribuidas a las protestas por

⁴Encuesta CEP – Estudio Nacional de Opinión Pública N° 84 (enero de 2020), realizada por el Centro de Estudios Públicos.

los entrevistados fueron: la desigualdad (el 38 %), las bajas pensiones (el 16 %), el alto costo de la vida (el 16 %), la mala calidad de la salud y educación públicas (el 13 %). El 55 % justifica “siempre” o “casi siempre” participar en una marcha; el 25 %, evadir el pago del transporte público cuando sube su precio; el 8 %, participar en barricadas o destrozos. Es importante notar que en el grupo de 18 a 24 años de edad, el 15 % justifica “siempre” o “casi siempre” participar en barricadas o destrozos, mientras que en el segmento con mayor educación (con 12 años o más de escolarización), el 25 % (“siempre”: 12 %; “casi siempre”: 13 %) justifica tal acción. Esto muestra un grado importante de radicalización.

Sobre los alcances de una nueva Constitución, el 56 % de la población cree que “probablemente ayude a resolver los problemas”, el 6 % cree que “probablemente empeore la situación actual”, el 25 % que “probablemente deje las cosas igual” y el 13 % no sabe o no contesta. Sobre la democracia y su funcionamiento, el 64 % piensa que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, el 6 % cree que en Chile funciona “bien” o “muy bien”, el 44 % cree que funciona “regular”, el 47 % que funciona “mal” o “muy mal” y el 4 % no sabe o no responde. Sobre las causas del estallido social, sobre la situación general del país y sobre la situación personal propia, una encuesta nacional administrada entre el 6 y el 15 de enero de 2020 a personas mayores de 18 años⁵ muestra que un 62 % cree que “el estallido social es consecuencia de la crisis económica”, mientras que un 34 % estima que “la crisis económica es producto del estallido social”; un 93 % cree que la distribución del ingreso es injusta; un 84 % cree que en Chile no se respetan las leyes; un 80 % estima que “uno nunca es lo suficientemente cuidadoso en el trato con los demás”, mientras que un 18 % piensa que “se puede confiar en la mayoría de las personas”; un 79 % se declara de acuerdo con las protestas que han tenido lugar estas últimas semanas; un 69 % cree que no se ha dado respuesta ninguna a las demandas sociales del estallido

⁵Barómetro del Trabajo (enero de 2020), estudio realizado por la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL) y la Market & Opinion Research International (MORI Chile).

social; el 56 % se describe como perteneciente a la clase baja; el 39 %, a la clase media; el 5 %, a la clase alta. Hace menos de tres años ⁶, un 19 % se declaraba como de clase baja; un 66 %, de clase media; un 16 %, de clase alta. Sin lugar a dudas, un vuelco significativo.

¿Expectativas desmedidas?

Los datos lo muestra: una proporción significativa de los protestantes posee estudios de educación superior. Lo que llama la atención si se considera que durante el último cuarto de siglo el número de estudiantes prácticamente se quintuplicó, debido especialmente a la incorporación de grupos de ingresos medios y bajos. En efecto, la participación de los dos quintiles inferiores, que era del 5 % y 7 %, aumentó al 42 % y 50 %, respectivamente; la del tercer quintil, que era del 13 %, aumentó al 50 %; la de los dos quintiles superiores, que era del 25 % y 50 %, aumentó al 60 % y 77 %, respectivamente. Si se ha podido acceder al nivel educativo superior, ¿por qué entonces protestar?

Por un lado, porque, según la PNUD, “hay diferencias significativas en el tipo de instituciones a las que acceden. Los jóvenes del estrato alto estudian preferentemente en universidades de mejor calidad (medida por los años de acreditación), mientras que aquellos de estrato más bajo lo hacen en institutos profesionales y centros de formación técnica, así como en universidades de peor calidad”. Según este mismo estudio, a las instituciones de mayor calidad asisten un 39 % de los estudiantes del estrato social bajo, un 45 % del medio bajo, un 52 % del medio y un 74 % del estrato alto. En particular, en las universidades de mayor calidad, donde se refleja con mayor claridad la desigual participación de los correspondientes estratos, la asistencia, partiendo de los estratos más bajos hacia los más altos, es del 9,2 %, 17,5 %, 31,5 % y 66,2 %, respectivamente. Y por el otro, porque la extensa democratización del acceso experimentada por la ES chilena porta tres elementos adicionales

⁶PNUD (2017). *Desiguales: orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile*. Santiago de Chile: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

que probablemente impactan sobre su vínculo con la protesta.

Primero, las altas expectativas de los estudiantes que ingresan cada año, quienes en su mayoría pertenecen a la primera generación dentro de sus respectivas familias que cursan estudios superiores. Segundo, el hecho de que tales expectativas, que se forman tempranamente durante la enseñanza secundaria y que podrían parecer moderadas en otros países, son desmesuradas en el caso de Chile. Según consultas hechas por la prueba PISA del año 2015, los jóvenes chilenos de 15 años tienen muy altas expectativas sobre el nivel escolar que esperan alcanzar, que, entre los países de la OCDE, solo son superadas por las expectativas de los jóvenes de Corea, Estados Unidos y Canadá. En Chile, el 66,6 % de los jóvenes de 15 años espera completar estudios profesionales; el 13,4 %, estudios técnicos. Las cifras promedio de la OCDE son el 44 % y el 15 %, respectivamente⁷. Por otra parte, según consultas hechas por la prueba PISA del año 2006, el 70 % de los jóvenes chilenos que entonces tenían 15 años, y que ahora se han incorporado al mercado laboral, esperaban ocupar en el futuro, como jóvenes adultos en torno a los 30 años de edad, posiciones directivas o de alto estatus —similares expectativas también se observaron en los jóvenes de México, Turquía e Israel—. Tercero, existe el riesgo de que estas optimistas expectativas puedan pronto verse frustradas en la práctica, como algunos estudios iniciados a fines de la primera década del presente siglo lo han venido demostrado. Yo mismo junto con un colega escribimos en esa época que el rápido crecimiento de profesionales podía estar generando una suerte de sobrepoblamiento en algunas profesiones que podía producir una polarización salarial y una pérdida de estatus y de autonomía laboral para los practicantes situados en la parte inferior de la pirámide de dichas profesiones⁸. Además, algunos economistas estimaron que para algunos estudiantes chilenos de ES, sobre todo para los matriculados en instituciones de menor calidad (prestigio), existía la probabilidad de

⁷ OECD (2017). *PISA 2015 Results (Volume III): Students' Well-Being*. París: OECD Publishing.

⁸ Brunner, J. J. y Uribe, D. (2007). *Mercados universitarios: el nuevo escenario de la educación superior*. Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.

que, una vez ingresados al mercado laboral, sus ingresos no serían lo suficiente como para permitirles saldar la deuda que contrajeron, a través de créditos estudiantiles, para costear sus estudios⁹.

Según muestra Bourdieu¹⁰, los procesos de masificación del acceso a certificados educacionales son ambiguos y, al final, pueden volverse contra su propio propósito. En la sección titulada “una generación engañada” de su libro *La Distinción*, habla del desajuste estructural que surge entre las aspiraciones que el sistema educacional genera en su fase de rápido crecimiento y las oportunidades que realmente ofrece. La desilusión colectiva resultante de ese desajuste, dice, “se encuentra en la base de la desafección con respecto al trabajo y de las manifestaciones del rechazo de la finitud social, que está en la raíz de todas las fugas y de todos los rechazos constitutivos de la ‘contra cultura’ adolescente”. Y, refiriéndose a la generación de estudiantes de 1968, donde observa, lo que él llama, ese “efecto de histéresis” —el desajuste entre las aspiraciones y las satisfacciones debido a la masificación—, habla de un “rechazo total [...] una mentalidad anti-institucional [que denuncian] los tácitos presupuestos del orden social, una suspensión en la práctica de la adhesión dóxica a los premios ofrecidos y los valores que profesa, y una retención de las inversiones que son una condición necesaria de su funcionamiento”. Lo que se puede decir que también es válido para el grupo de jóvenes que ahora concurren masivamente a la ES, que incluye, como vimos, a una fracción creciente de estudiantes provenientes de los hogares pertenecientes a los dos quintiles de menores ingresos.

Súmese a lo anterior el efecto de un desajuste similar entre expectativas y satisfacciones al momento en que esos jóvenes acceden al mercado de trabajo e inician una precaria vida profesional, o, más bien, semiprofesional. Se trata de un grupo de alrededor de 250 mil jóvenes, profesionales y técnicos, que cada año acceden al mercado laboral bajo el efecto de la histéresis bourdieuana. Una joven kinesióloga citada

⁹Urzúa, S. (2018). La rentabilidad de la educación superior en Chile: revisión de las bases de 30 años de políticas públicas. *Estudios Públicos*, núm. 125, págs. 1–52.

¹⁰Bourdieu, P. (2016). *La distinción: criterios y bases sociales del gusto*. Barcelona: Taurus.

en un estudio chileno referido a esta generación desengañada espeta: “[...] Te dai cuenta que tener el título, el cartón en la mano, [con el que] uno dice, oh, ya, soy profesional, no significa nada, no te asegura que todos tus sueños, todas tus ideas queden como completas”¹¹. En estas palabras pueden leerse varios aspectos del desajuste entre el sueño y el despertar; entre las condiciones imaginadas del mercado laboral y sus condiciones actuales; entre el prestigio proclamado por, o atribuido a, la institución otorgante del título y el prestigio efectivo que comanda en el mundo ocupacional; entre el estatus y el ingreso anticipados y los reconocidos socialmente. Así resume esta experiencia un arquitecto que ya ha completado una buena parte de su vida profesional en una entrevista para una tesis sobre representaciones de movilidad social: “Yo lo que veo es que, por ejemplo, cuando yo me titulé de arquitecto, el arquitecto tenía un estatus en la sociedad que era mucho mayor del que tiene ahora. O sea, antes ser arquitecto era un prestigio en sí, porque los arquitectos solo por serlo, se le abrían oportunidades y podían acceder a un estatus de vida que era destacado dentro de la sociedad, pero hoy, no te entrega un estatus en sí mismo [...]”¹². O bien, según declara un egresado de derecho de una universidad privada regional no selectiva en otro estudio: “Hoy en día sacan y sacan y sacan profesionales, y uno encuentra muchísimo cesante ilustrado; gente con mucho título universitario, muchos estudios, pero que no consigue trabajo; está trabajando en ventas o en cualquier cosa para poder sobrevivir, porque al final lo que necesita es dinero pa vivir”¹³.

Con todo, la “generación desengañada”, que aquí se postula como la base de la protesta social chilena reciente, no opera como un factor único, por sí sola, sino que lo hace en combinación con otros procesos de

¹¹Ramos Matus, C. F. (2018). *Decisiones educativas y valoración de la educación superior en la trayectoria académica de los profesionales primera generación universitaria* (Tesis de pregrado). Universidad de Chile, Santiago de Chile.

¹²González Madariaga, V. (2017). *Trayectorias entre la autoafirmación y la frustración en la sociedad chilena: representaciones de meritocracia y desigualdad en quienes han vivido movilidad social ascendente* (Tesis de maestría). Universidad de Chile, Santiago de Chile.

¹³Vásquez Palma, O. (2017). *Educación superior y movilidad social en universidades privadas de baja selectividad: el caso chileno* (Tesis doctoral). Universidad de Chile, Santiago de Chile.

mayor magnitud, de los cuales ella forma parte, que han resultado de las transformaciones experimentadas por la sociedad chilena durante los últimos treinta años. Me refiero, ante todo, a la intensa modernización capitalista, que ha traído consigo una generalizada mercantilización de la vida, una individuación y contractualización de las relaciones humanas, la disolución de las comunidades tradicionales y la emergencia de una imprecisamente denominada “sociedad de clases medias”, que más bien se trata de una nueva forma de estratificación de la sociedad en la que ha aumentado fuertemente el número de profesionales, semiprofesionales y técnicos, trabajadores de cuello y corbata, personal de servicios calificados en el sector público y privado, personas con formación superior completa e incompleta que trabajan por su cuenta y, en fin, un vasto segmento de personas que han superado la línea de pobreza, pero que apenas logran mantenerse por encima de ella.

En esta definición amplia de clases medias hay una estratificación interna en clases media baja, intermedia y alta, que depende de las ocupaciones, los ingresos, los niveles de consumo, las posesiones y los estilos de vida. En Chile, alrededor de un 70 % de la población se auto califica como de clases medias¹⁴, que pragmáticamente pueden definirse como compuestas por los estratos de la clase baja no pobre (1,8 veces por encima de la línea de pobreza), la clase media baja (hasta tres veces por encima de la línea de pobreza) y la clase media intermedia (de 3 a 6 veces por encima de la línea de pobreza) que, en su conjunto, suman el 64 % de la población mayor de 25 años. En general, para el año 2017, diferentes estadísticas coinciden en que alrededor de la mitad de la población mayor de 25 años se ubica en los estratos bajos no pobres y los estratos medio-bajo, que “presentan altos riesgos de caer en situación de pobreza ante episodios de desempleo o precarización del trabajo, enfermedades catastróficas, accidentes o desastres naturales”¹⁵. Es probable que en ese universo en riesgo, en su segmento menor de 40 años —en

¹⁴Méndez, M. L. (2008). Middle class identities in a neoliberal age: tensions between contested authenticities. *The Sociological Review*, vol. 56, núm. 2, págs. 220–237.

¹⁵Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2019). *Panorama Social de América Latina, 2019*.

efecto, el 75 % de los protestantes encuestados tiene una edad igual o menor a los 39 años ¹⁶—, se encuentre el centro de gravedad de la protesta social y la explicación de su carácter multitudinario y su diversidad de demandas. Esta concepción de las clases medias explica además que una parte de las personas que califican como pertenecientes a las clases medias no tengan identidades bien definidas. Existe entre ellas una constante duda respecto de dónde se encuentran en la jerarquía social y hasta dónde podrán moverse, ya sea en sentido vertical u horizontal. Como señala una joven psicóloga egresada de una universidad privada no selectiva: “No sé en qué clase social, no sé, me veo en un punto, me veo en un punto de desarrollo continuo; pero sí de que estaba abajo y ahora estoy más arriba, cuánto más arriba no sé, no sé si voy a tener más techo o voy a seguir, no sé si me voy a mantener, cachay” ¹⁷. Y siempre se halla presente la posibilidad, el riesgo, de volver a bajar.

Todo parece indicar, entonces, que la protesta social chilena de estos meses ha sido, básicamente, una protesta de clases medias en el sentido de esos tres grupos —bajo no pobres, medio bajo y algunas fracciones no consolidadas del estrato medio intermedio—. Uno de los segmentos más activos es el conformado por estudiantes de educación media y de educación superior, jóvenes profesionales y técnicos de la primera generación en cursar estudios superiores dentro de sus familias y miembros todavía inseguros de su posición de los estratos intermedios, muchos de ellos afectados por deudas (de consumo, de estudios e hipotecarias), por la ralentización de la economía, la dificultad de encontrar empleo, los ingresos insuficientes y la precaria calidad de los servicios de salud, educación y previsión a los que acceden ellos y sus familias. Como dice en una reciente entrevista un analista de las izquierdas: “hay un pueblo nuevo, que es el que construyó el neoliberalismo, que no es el pueblo del siglo XX. Es el pueblo de estos profesionales que no son clase media, que les vendieron un cuento que no es” ¹⁸.

¹⁶Véase Encuesta Zona Cero (noviembre de 2019).

¹⁷Véase Ramos Matus, C. F. (2018).

¹⁸Vergara, P. (17 de enero 2020). *Carlos Ruiz: “la izquierda chilena no tiene proyecto”*. Recuperado de <https://www.guionb.com/entrevistas/carlos-ruiz-la-izquierda-chilena-no-tiene-proyecto/>.

De modo que, cabe plantear la hipótesis de que el fenómeno desencadenado por la inflación de credenciales y el efecto de histéresis reverbera tan intensamente en una sociedad movilizadora —como actualmente sucede— porque se imbrica con los efectos de las transformaciones experimentadas por la sociedad chilena durante los últimos 30 años. Así pues, la explosión social sería el resultado de una revolución de la educación superior coligada con una transición hacia una sociedad de estratos medios, que pugnan por alcanzar y consolidar posiciones más estables y justas en la distribución y jerarquía de oportunidades y beneficios dentro de un Estado que proclama pero no garantiza derechos sociales.

La universidad ante la situación social: ni militante, ni distante

Veamos ahora el segundo aspecto del análisis sobre el vínculo entre la ES, la protesta social y la crisis de gobernabilidad. Para ello nos moveremos desde el plano sociológico al normativo: en este cuadro de convulsión, cabe plantear la cuestión de la responsabilidad de la universidad con la superación de la crisis. Esta es una cuestión tradicional en el pensamiento sobre la universidad latinoamericana, cuyo locus clásico es la reforma de Córdoba de 1918. La formulación reciente más interesante se halla en los escritos de José Medina Echavarría. Si la universidad ha tendido a ser la institucionalización de la inteligencia, sostenía él, entonces su misión en situaciones de crisis debe ser orientar, y comprometerse con, la búsqueda de salidas que permitan superarlas¹⁹. Mas esto debía ser hecho desde la racionalidad propia de esa inteligencia; o sea, como reclamaba su maestro Max Weber, desde la vocación de la ciencia. Efectivamente, Medina Echavarría abogaba por una universidad “partícipe” —que forma parte de su sociedad y contribuye a la solución

¹⁹Graciarena, J. (1980). Universidad, inteligencia e ideología: en torno a algunas ideas de José Medina Echavarría. En Graciarena, J. y otros (Eds.), *Universidad y desarrollo en América Latina y el Caribe* (págs. 9–28). Caracas: CRESALC-UNESCO.

de sus problemas y crisis desde la razón científico-técnica—, sin dejarse llevar hacia los extremos de lo que él llamaba la “universidad enclaustrada” y la “universidad militante”. “Si la ‘Universidad enclaustrada’ ha sido siempre excepcional y hoy casi imposible —‘torre de marfil’ tan sólo en el denuesto— su contraposición radical no lo es menos, porque acaba precisamente con la universidad misma. Frente a la ‘Universidad enclaustrada’, la ‘Universidad militante’ es la que se deja invadir sin tamiz alguno por los ruidos de la calle y reproduce en su seno, en exacto microcosmos, todos los conflictos y pasiones de su mundo. La tarea científica desaparece y sólo quedan los gritos sustituyendo a las razones. La apertura al mundo de la actividad universitaria —su única manera de influir sobre él— sólo cabe en la forma de ‘Universidad partícipe’ es decir no militante ni enclaustrada. ‘Universidad partícipe’ es aquella que enfrenta los problemas del día aceptándolos como tema riguroso de su consideración científica, para afirmar únicamente lo que desde esa perspectiva se puede decir [...] Nada de su tiempo puede serle ajeno, pero sólo en la medida que pueda situarlo a la distancia que exige su busca permanente de la verdad”²⁰.

He ahí el difícil balance que las universidades chilenas necesitan encontrar en la actual coyuntura de protestas y crisis en la cual se encuentran involucradas. De un lado, como se vio, por la inevitable popularización de las credenciales profesionales y técnicas que trajo consigo la expansión de la ES y desencadenó un efecto de histéresis; del otro, por la tentación de abandonar la reflexividad racional propia del campo académico y las disciplinas que cultiva para ponerse a militar junto a la calle, y sustituir esa racionalidad por el calor de las trincheras y la serenidad por el fervor. Como señala un promotor de este diseño militante, “lo que está en debate, es la creación de un vínculo político orgánico entre la universidad y la sociedad, que ponga fin al aislamiento de la universidad”, que sea “permeable a las demandas sociales, especialmente aquellas originadas en grupos sociales que no tienen el poder

²⁰Medina Echavarría, J. (1967). *Filosofía, educación y desarrollo*. México: Siglo XXI Editores.

para imponerlas”²¹. Dicho más directamente, se trata de la universidad que se propone desempeñar “un papel estratégico y de vanguardia en la transformación social y, en lo posible, en la revolución y liberación nacional”²².

Este componente de compromiso político, ideológico y de lucha social está en el núcleo de una cierta tradición sobre la idea de la universidad latinoamericana elaborada ya bien desde la perspectiva de los movimientos estudiantiles²³ o de la narrativa de la reforma universitaria que arranca en Córdoba en 1918²⁴. La idea normativa que se deduce del pensamiento de Medina Echavarría corre en un sentido distinto, contrario incluso. Según él, la responsabilidad de la inteligencia²⁵ consiste, especialmente en tiempos de protestas y crisis, en un permanente “compromiso con las alternativas de salida”, que deben ser buscadas desde la racionalidad comunicativa²⁶ propia de la universidad. Retoma así la idea de su maestro Max Weber de “que la política no tiene cabida en las aulas”²⁷. La aplicación de esta máxima sería, seguramente, una de las contribuciones más serias y duraderas que las universidades chilenas podrían hacer para encontrar una salida de la crisis. Tal contribución no consiste en unirse a la calle y dejarse invadir por el sentimiento, o incluso las justificaciones del frenesí de la protesta, y menos por la violencia, sino en perseverar en su misión en el plano formativo, en el espacio de la deliberación pública de ideas, en el rol netamente intelectual, en el enérgico ejercicio de la libertad de enseñar, aprender e investigar y

²¹Santos, B. de S. (2007). *La universidad en el siglo XXI: para una Reforma democrática y emancipatoria de la universidad*. La Paz: CIDES-UMSA, ASDI y Plural editores.

²²Brunner, J. J. (2007). *Universidad y sociedad en América Latina*. Xalapa: Universidad Veracruzana.

²³Donoso Romo, A. (2017). Movimientos estudiantiles universitarios en la época contemporánea de América Latina: elementos para pensar un modelo de aproximación histórica. En Marsiske, R. (Coord.), *Movimientos estudiantiles en la historia de América Latina V* (págs. 57–84). Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.

²⁴Sader, E., Aboites, H. y Gentili, P. (Comps.). (2008). *La reforma universitaria: desafíos y perspectivas noventa años después*. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

²⁵Medina Echavarría, J. (1943). *Responsabilidad de la inteligencia: estudios sobre nuestro tiempo*. México: Fondo de Cultura Económica.

²⁶Habermas, J. y Blazek, J. (1987). The Idea of the University: Learning Processes. *New German Critique*, núm. 41, págs. 3–22.

²⁷Weber, M. (2007). *La ciencia como profesión / La política como profesión*. Madrid: Espasa Calpe.

en el rechazo a cualquier intento por subordinar la vida interior de las universidades a lo que su entorno exterior considera políticamente correcto. Allí reside también la sobrevivencia del pensamiento crítico en una época del predominio de las emociones masivas.